

# **CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA**

## **PRONUNCIAMIENTO DEL COMITÉ PERMANENTE ANTE LA REALIDAD DEL PLAN COLOMBIA**

En muchas ocasiones los Obispos de Colombia hemos hecho oír nuestra voz profética, para denunciar la gravedad y complejidad del problema del narcotráfico que no es exclusivo de nuestro país sino que afecta a muchos otros. Por tanto la respuesta tiene que nacer del esfuerzo de todos.

El narcotráfico se ha convertido en nuestro país en una de las principales causas de destrucción social, de financiación de la guerra y de vergüenza ante la comunidad internacional. Por eso rechazamos, una vez más, en forma clara y enfática este flagelo en todas y cada una de sus fases: la producción, el mercadeo y el consumo.

Estimamos necesario establecer estructuras solidarias para que quienes están vinculados con los cultivos ilícitos puedan sustituirlos, y tener acceso a formas de transporte y comercialización de productos alternativos y así puedan llevar una vida digna e integrada al sistema productivo del país.

Consideramos que la solución frente a los cultivos de coca y amapola no es la fumigación indiscriminada, que ciertamente trae consigo otros efectos nocivos tanto para la naturaleza como para la persona humana. Recomendamos más bien la erradicación y el ofrecimiento de nuevas posibilidades de trabajo.

Hay una conciencia creciente en Colombia sobre el valor del aporte de la comunidad internacional al proceso colombiano. Al valorar positivamente esta ayuda consideramos que ella debe servir para asegurar la realización de iniciativas que generen empleo, salud, educación y apoyar la administración de justicia.

Es urgente que estos aportes internacionales tengan una verdadera inversión social, lo cual exige la presencia honesta del Estado con todos sus servicios en beneficio de los campesinos y de las clases menos favorecidas. Se han de emplear procurando un equilibrio conveniente entre la ayuda militar por un lado, y la ayuda humanitaria para

el desarrollo, por el otro. Así mismo, consideramos urgente que toda esta ayuda debe estar condicionada por el respeto a los Derechos Humanos.

Auguramos que la aplicación de este Plan pueda convertirse en un proyecto saludable para la paz, la reconciliación y la sana convivencia entre los colombianos.

+ Alberto Giraldo Jaramillo  
Arzobispo de Medellín  
Presidente de la Conferencia Episcopal

Bogotá, D.C., 20 de septiembre de 2000